MANUEL CEA
Director de Ingeniería en Administración de Empresas UNAB sede Viña del Mar

Bots y política: riesgo económico

En las últimas semanas, Chile ha sido escenario de una polémica que trasciende lo electoral: el uso de redes de bots en el marco de la campaña presidencial. Reportajes de medios nacionales e internacionales han develado la existencia de estrategias digitales de desinformación destinadas a atacar a candidatos, amplificar discursos de odio y manipular el debate público. El fenómeno no es aislado; forma parte de una tendencia global de intervención política mediante herramientas tecnológicas que, lejos de fortalecer la deliberación democrática, erosionan la confianza en las instituciones.

Los analistas advierten que la desinformación sostenida por bots instala un clima de sospecha permanente y dificulta la formación de juicios informados. Lo que se ha conocido es apenas "la punta del iceberg": ataques coordinados contra figuras como Evelyn Matthei y Gloria Hutt han puesto en entredicho la legitimidad del debate político, mientras partidos como el Republicano se han visto forzados a desmarcarse públicamente de estas operaciones. A ello se suman las revelaciones sobre la participación de asesores comunicacionales y directivos de medios, lo que refuerza la percepción de opacidad y manipulación.

Pero el problema no se restringe a la política. Las implicancias económicas del uso de bots y de la desinformación digital son cada vez más claras. La economía contemporánea se sostiene en gran medida sobre la confianza: la de los inversionistas en la estabilidad del país, la de los consumidores en el mercado y la de la comunidad internacional en el respeto a las reglas del juego democrático. Cuando esa confianza se ve dañada por campañas de desprestigio, los costos son inmediatos. La incertidumbre política suele traducirse en volatilidad cambiaria, caídas bursátiles y restricciones en el flujo de capitales. Además, las agencias clasificadoras de riesgo consideran la fortaleza institucional como un factor clave al evaluar la capacidad crediticia de un país. Una democracia percibida como frágil o manipulada por redes digitales puede encarecer el financiamiento soberano y elevar la prima de riesgo país.

Las empresas también resienten este escenario. El clima de polarización digital resta previsibilidad y desalienta la inversión. Sectores estratégicos como el turismo, altamente dependiente de la imagen internacional de Chile como un país seguro y confiable, pueden sufrir retrocesos si el relato global se contamina con percepciones de inestabilidad. Lo mismo ocurre con la economía de servicios, pilar en la diversificación productiva, que requiere certezas y cohesión social para prosperar.

Existe además un costo social menos visible: la erosión del capital humano. Una ciudadanía expuesta de manera constante a noticias falsas y discursos de odio vive en un entorno de desconfianza que afecta tanto su participación política como sus decisiones económicas cotidianas. Desde el consumo responsable hasta la inversión familiar, la manipulación digital distorsiona la percepción de riesgos y oportunidades, condicionando la vida económica de los hogares.

El desafío para Chile es doble. Por un lado, avanzar hacia regulaciones claras y mecanismos efectivos de fiscalización que permitan identificar y sancionar el uso de bots en la política. Por otro, reconocer que la estabilidad económica depende de la solidez institucional y del resguardo del sistema democrático. Blindar la economía frente a la manipulación digital implica proteger la democracia como un bien público esencial. En un mundo globalizado, donde la reputación de los países incide directamente en la inversión y la competitividad, Chile no puede permitir que su debate político sea capturado por redes de desinformación. Los bots han dejado de ser una herramienta tecnológica neutral: hoy son un factor de riesgo que amenaza tanto la salud de la democracia como la fortaleza de la economía.